

Boletín Oficial



DE LA PROVINCIA DE ORENSE.

Se publica los martes, jueves y sábados de cada semana.—Se suscribe en la imprenta de D. Ceáreo Paz y Hermano, Fuente del Rey número 10, á 20 rs. trimestre para esta capital, y 30 para fuera franco de porte por trimestres adelantados.—Números sueltos á real el pliego.

PARTE OFICIAL.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

S. M. la Reina nuestra Señora (Q. D. G.) y su augusta Real Familia continúan sin novedad en esta Corte en su importante salud.

ARTICULO DE OFICIO.

GOBIERNO DE PROVINCIA.

Número 126.

Por la Dirección general de Gobierno del Ministerio de la Gobernación en orden fecha 14 del presente se me dice lo que copio.

En virtud de Reales órdenes expedidas por el Ministerio de la Guerra han sido rehabilitados en sus respectivos empleos D. Antonio Gil Taboada, Capitán que fué de Infantería, D. Benito de Castro González, Teniente del batallón provincial de Segorbe, D. Manuel Araujo Flores, Capitán del Cuerpo de Estados mayores de plaza y D. Pedro Carnicel García, Capitán graduado, Teniente de Infantería; y declarados baja en el Ejército el Teniente del Regimiento de América D. José Ruiz Vazquez y el Subteniente con destino á la Isla de Cuba, D. Eduardo Aznar la Sota. Por otra Real orden comunicada á este Ministerio por el de Marina se ha mandado que Don Francisco Enrique Llanos Alcaráz, Subteniente honorario de Infantería de Marina, quede deshonorado del carácter que tenía y le sea recogido el Real despacho.

Lo digo á V. S. para su conocimiento y á fin de que haciéndolo saber á las autoridades locales de esa provincia, no puedan aparecer los tres últimos individuos con un carácter militar que han per-

dido con arreglo á la Ordenanza y disposiciones vigentes.

Lo que he dispuesto dar publicidad por medio del periódico oficial de esta provincia para su cumplimiento. Orense febrero 23 de 1859.—El Gobernador, Hermenegildo Guilian.

Número 127.

La Dirección general de Contabilidad de Hacienda pública en 15 del actual me dice lo siguiente.

«El Excmo. Sr. Ministro de Hacienda con fecha 10 del corriente comunica á esta Dirección general la Real orden que sigue:

Hmo. Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la consulta que V. I. dirigió á este Ministerio en 23 de setiembre último, exponiendo que muchos Gobernadores de provincia manifestaban á esa Dirección, que á pesar de sus respectivos avisos y circulares para que las corporaciones y establecimientos civiles delegasen con la autorización competente persona que prestase su conformidad en las liquidaciones del capital á que tienen derecho por sus bienes enajenados no lo han verificado, y la consultaban si las daban por ultimadas y las remitían sin ese requisito. En su vista, y considerando S. M. que para emitir las inscripciones nominativas de la renta de 3 por 100 á favor de las expresadas corporaciones y establecimientos, que se determinan en el artículo 5.^o del proyecto de ley de presupuestos de 1858, autorizado por la ley de 26 de marzo del propio año, es absolutamente indispensable que partan de las referidas liquidaciones, después de examinadas y aprobadas por la Dirección general del cargo de V. I., con arreglo á las disposiciones de la Real instrucción de 12 de mayo último; ha tenido á bien resolver, que los Gobernadores con todo el lleno de su autoridad remuevan cuantos obstáculos se opongan al cumplimien-

to de este importante servicio, señalando á las corporaciones y establecimientos el improrrogable término de un mes para que presten ó nieguen su conformidad á las citadas liquidaciones; advirtiéndoles que en otro caso se considerarán consentidas y aceptadas por los mismos, para todos los efectos de la antedicha instrucción.—De Real orden lo comunico á V. I. para su inteligencia y efectos correspondientes.

Y la Dirección la traslada á V. S. para su inteligencia y exacto cumplimiento, encargándole al mismo tiempo que despliegue toda su energía con las Oficinas de esa provincia, si después del mucho tiempo transcurrido desde que se comunicó la Real instrucción de 12 de mayo último han dejado de formarse las liquidaciones respectivas á las corporaciones civiles de esa provincia hasta fin del tercer trimestre de 1858, por no haber cumplido sus prescripciones; cuidando V. S. de que después de obtener las formalidades prevenidas, se remitan á esta Dirección general, como está mandado.»

Lo que se publica para conocimiento de las corporaciones á que alude, señalándoles para su cumplimiento el improrrogable término de un mes á contar desde el dia de la publicación, pasado el cual se considerarán consentidas y aceptadas las liquidaciones que se practiquen. Orense 23 de febrero de 1859.—El Gobernador, Hermenegildo Guilian.

Número 128.

Hallándose vacante la Secretaría del Ayuntamiento de Cartelle en esta provincia, dotada con el sueldo de 2,200 rs. anuales, se anuncia al público por el término de treinta días contados desde la inserción de este anuncio en el Boletín oficial y Gaceta, á fin de que los aspirantes que quieran optar á dicho destino, puedan presentar sus solicitudes en

la Secretaría del citado Ayuntamiento dentro del término prefijado.

Orense febrero 25 de 1859.—El Gobernador, Hermenegildo Guilian.

Número 129.

En la Gaceta de Madrid número 50 del sábado 19 del actual se lee lo siguiente:

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

Beneficencia y Sanidad.—Negociación 5.^o

La Reina (Q. D. G.) ha sabido con el mayor desagrado que entre los Médicos, Cirujanos, Farmacéuticos y Veterinarios titulares existe un considerable número que carece de los títulos académicos para ejercer legalmente dichas profesiones. Persuadida S. M. de la necesidad y conveniencia de reprimir un mal cuya continuación puede afectar á la salud de los pueblos, se ha dignado disponer que V. S., haciendo uso de las facultades que le confiere la legislación vigente, adopte cuantas medidas le dicte su celo para impedir el ejercicio de las profesiones médicas á los que, sin el título competente, se intrusen en ellas, remitiendo al Gobierno una nota de cuantos se hallen en este caso en el territorio del manijo de V. S., para proceder contra ellos con arreglo á las leyes.

Igualmente se ha servido mandar que se recuerde á V. S. la Real orden circular de 28 de setiembre último publicada en la Gaceta de 6 de octubre siguiente, prohibiendo la elaboración y venta de los medicamentos no autorizados por la ley de Sanidad, á cuya fin prestará V. S. un preferente apoyo á los Subdelegados de Medicina y Cirugía, Farmacia y Veterinaria, para que impidan en sus respectivos partidos la continuación de los abusos expresados, recordándoles los deberes que en estos casos les imponen los reglamentos, y previniéndoles que denuncien á V. S. inmediatamente cuálquiera falta que adviertan, con el objeto de que los infractores sean castigados con mano fuerte y sin contemplación de ningún género.

De Real orden lo comunico á V. S. para su inteligencia y cumplimiento. Díos guarde á V. S. muchos años. Madrid 10 de febrero de 1859.—Posada Herrera.—Sr. Gobernador de la provincia de...

Al insertar la anterior soberana disposición en este periódico oficial, encargo

muy particularmente á los señores Subdelegados de las respectivas facultades me déu cuenta de cuantas infracciones llegan á su noticia, seguros de que obtendrán de mi autoridad todo el apoyo necesario para estirpar los abusos que en cumplimiento de su deber me denuncian. Orense 21 de febrero de 1859.—El Gobernador, Hermenegildo Guitán.

Número 130.

En la Gaceta de Madrid número 51 del domingo 20 del actual se lee lo siguiente:

MINISTERIO DE FOMENTO.

Notas.

Exmo. Sr.: Entre las varias medidas que por este Ministerio de mi cargo se han adoptado para llevar á efecto la clasificación general de los puentes, con arreglo al Real decreto que, de acuerdo con el Consejo de Ministros, se ha dignado rubricar S. M. con fecha de ayer, se encunta como una de las primeras la distribución del personal de Ingenieros del ramo de modo que en todas las provincias puedan hacer por si los trabajos de clasificación, y en ninguna haya que apelar con este objeto á los Comisarios y peritos sino como auxiliares de los mismos.

De Real orden lo pongo en conocimiento de V. E., en contestación á la que se sirvió rendirme en 3 del actual, y en la que me proponía la adopción de esa misma medida. Díos guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de febrero de 1859.—El Marqués de Corvera.—Señor Ministro de Hacienda. 20

Lo que se publica para conocimiento de los funcionarios de la Administración en general y de los del ramo de montes en particular. Orense 21 de febrero de 1859.—El Gobernador, Hermenegildo Guitán.

Instrucción pública.—Negociado 4º

Hmo. Sr.: Para que el art. 212 de la ley de 9 de setiembre de 1857 se cumpla en todos los Institutos de una manera uniforme, S. M. la Reina (Q. D. G.) ha tenido á bien adoptar las disposiciones siguientes:

1.º Los Catedráticos de los Establecimientos de segunda enseñanza se auxiliarán unos a otros en vacantes, ausencias y enfermedades, observándose cuando esto se verifique, lo dispuesto en la circular expedida por esa Dirección general el 30 de octubre de 1857.

2.º Cuando la sustitución mutua no fuere posible, nombrará el Jefe de la Escuela un sustituto con la mitad de su sueldo señalado á la Cátedra que le encargase, dando inmediatamente cuenta al Gobierno de su designación y de las razones que hubiere tenido para adoptarla.

3.º Cuando la Dirección general nombre los sustitutos, disfrutarán estos las dos terceras partes del sueldo designado a las respectivas Cátedras.

De Real orden lo comunico á V. E. para su inteligencia y efectos correspondientes. Díos guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de febrero de 1859.—Corvera.—Sr. Director general de Instrucción pública.

Lo que se publica para conocimiento y cumplimiento de las personas á quienes corresponda. Orense 21 de febrero de 1859.—El Gobernador, Hermenegildo Guitán.

Número 131.

En la Gaceta de Madrid número 31 del lunes 31 de enero último se lee lo siguiente:

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

Administración.—Negociado 6º

Exmo. Sr.: Remitido á informe de las Secciones de Gracia y Justicia y Gobernación del Consejo de Estado el expediente sobre si es ó no necesaria la autorización para procesar á don Esteban Petriz, alcalde de Urdués, por faltas cometidas en ejercicio de funciones como delegado del poder judicial, han consultado lo siguiente:

Exmo. Sr.: Estas Secciones han examinado el expediente y testimonio que respectivamente han remitido el Gobernador de la provincia de Huesca y el Juez de primera instancia de Jaca, sobre si es ó no necesaria la autorización para procesar al alcalde de Urdués—don Esteban Petriz; de cuyos documentos resulta:

Que á consecuencia de una comunicación de la Guardia-civil, se formó causa por el Juez expresado sobre descubrimiento de malhechores en el lugar de Urdués, y practicadas varias diligencias, aparecieron méritos para dirigir el procedimiento contra el alcalde don Esteban Petriz, por no haber tomado las medidas necesarias ni dado parte al Juzgado acerca de los indicados malhechores, que estuvieron en aquel pueblo la noche del 7 de febrero último, á pesar de haber en la alcaidia órdenes del Juez y haberse publicado edictos respecto de uno de los malhechores que se había fugado de las cárceles del mismo Urdués;

Que el Juez recibió indagatoria al alcalde y dió simplemente aviso al Gobernador de la provincia; creyendo que la autorización era innecesaria para el procedimiento; pero, el Gobernador, de acuerdo con el Consejo provincial, se dirigió al Juez á fin de que solicitará su autorización; y este, oido el Promotor fiscal, insistió en que no era necesaria:

En virtud de los relacionados antecedentes:

Visto el art. 73 de la ley de 8 de enero de 1845, que determina que además de las facultades que la misma señala á los alcaldes ejercerán estos las atribuciones judiciales que las leyes ó reglamentos les conceden, ó en lo sucesivo les concedieren:

Visto el art. 55 del reglamento provisional para la administración de justicia en lo respectivo á la jurisdicción ordinaria, según el cual los alcaldes y sus tenientes, en el caso de cometerse en sus pueblos algún delito ó de encontrarse algún delincuente, podrán y deberán proceder de oficio ó á instancia de parte á formar las primeras diligencias del sumario y arrestar á los reos, siempre que constare que lo son ó que haya racional fundamento suficiente para considerarlos y presumirlos tales; dando cuenta inmediatamente al respectivo Juez letrado de primera instancia, al que remitirán las diligencias, poniendo á su disposición los reos:

Vistos los artículos 105 y 106 del reglamento de Juzgados de primera instancia, en que se prescribe que los alcaldes y sus tenientes, en la formación de las diligencias de que habla el art. 55 del anterior reglamento citado, y en las que practiquen en virtud de despachos que los Juzgados les libren, si no tienen por conveniente delegar en otra persona, serán considerados como delegados y auxiliares de los mismos Juzgados y subordinados por tanto á ellos:

Visto el art. 7º del Real decreto de 27 de marzo de 1850, que establece que cuando el hecho por que se procesa á un funcionario no sea relativo al ejercicio de atribuciones administrativas, proce-

derá libremente el Juez á lo que en justicia haya lugar sin más formalidad que dar aviso al Gobernador de la provincia:

Considerando:

1.º Que el hecho por que se dirige el procedimiento contra el alcalde de Urdués, es su falta ó negligencia en el desempeño de las funciones judiciales que le son propias, como delegado ó auxiliar de la jurisdicción ordinaria para la persecución y captura de delincuentes, según la ley y los dos reglamentos citados;

2.º Que es por lo mismo evidente que en el caso actual no podía proceder libremente el Juez, iguallo ha verificado, contra el alcalde sin solicitar la autorización, con arreglo al artículo que además se cita del Real decreto de 27 de marzo de 1850;

Las Secciones opinan que podría V. E. proponer á S. M. que se resuelva que la autorización sea necesaria.

Y habiéndose dirigido S. M. la Reina (Q. D. G.) á solver de conformidad con lo consultado por dichas Secciones, de Real orden lo comunicó á V. E. para su inteligencia y efectos correspondientes. Díos guarde á V. E. muchos años. Madrid 6 de enero de 1859.—Posada Herrera.—Sr. Gobernador de la provincia de Guadalajara.

sus dos acusadores, tanto lo que dice el Gobernador como las circunstancias de que no se haya confirmado la acusación por los demás vigilantes llamados á declarar acerca de ella, y de que el mismo Comisario daba buenos informes de las personas que se supone había hecho denunciar el mismo, siempre que tenían lugar las denuncias, por lo que no sucede complicación en el procedimiento.

Las Secciones opinan que debe confirmarse la negativa del Gobernador de Guadalajara en lo que se refiere al Comisario de Protección y Seguridad pública, quedando enteradas respectivamente hiper a concedido para los dos vigilantes Castro Fernández y Fermín Cañas.

Y habiéndose dignado S. M. la Reina (Q. D. G.) resolver de conformidad con lo consultado por dichas Secciones, de Real orden lo comunicó á V. S. para su inteligencia y efectos correspondientes. Díos guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 de enero de 1859.—Posada Herrera.—Sr. Gobernador de la provincia de Guadalajara.

Remitido á informe de las Secciones de Gracia y Justicia y Gobernación del Consejo de Estado el expediente de autorización negada por V. S. al Juez de Hacienda de esa capital para procesar á Francisco Vallejo, guarda de la dehesa del Estado, denominada Barroquermejo, por supuestos abusos en el ejercicio de su cargo, han consultado lo siguiente:

Exmo. Sr.: Estas Secciones han examinado el expediente en virtud del que el Gobernador de la provincia de Cáceres ha negado al Juez de Hacienda de la misma la autorización que solicita para procesar á Francisco Vallejo, guardia de la dehesa denominada Barromermejo y perteneciente al Estado:

Resulta de este expediente: Que denunciado por el arrendador de la mencionada dehesa el hecho de que el guarda Vallejo y varios vecinos de Coria cortaban leña para quemar, causando daños al arbolado de la misma dehesa, el administrador de Propiedades y Derechos del Estado de la provincia dispuso que por el alcalde de dicho pueblo se practicasen las diligencias necesarias en averiguación de los delitos objeto de la denuncia; que no pudo justificarse, sino que, según unos testigos, el guarda había llevado leña de incinia á un lugar en que se elaboraba aceite, y según otros, que á mediados de febrero último estuvo cortando en la dehesa y tenía disputas cuando se le vió dos caballerías sin duda para trasportarla;

Que en su defensa presentó el guarda licencias dadas en diciembre de 1857 por el administrador de bienes nacionales del partido de Coria y que le facultan para utilizar leña de encinas viejas, llevándola al lugar, y además para limpiar las encinas que lo necesitasen utilizándose de los despojos;

Que remitiadas estas diligencias al Juez de Hacienda, pidió este funcionario de conformidad con el dictamen fiscal, la autorización necesaria para procesar al guarda Vallejo por creer que abusó de la licencia que se le había concedido; y el Gobernador, de acuerdo con el Consejo provincial, la negó, fundándose en que no resulta probado este abuso;

Considerando: 1.º Que en efecto no resulta probada la extralimitación que supone cometer el guarda Vallejo de las licencias que le fueron otorgadas por el administrador de bienes nacionales del partido de Coria, y que en todo caso la autoridad que las otorgó debería ser la primera en juzgar acerca de los límites de la misma y del uso que de ella se hubiese hecho, pasando a los Tribunales el tanto de culpa que pudiese resultar;

Las Secciones opinan que debe confirmarse la negativa del gobernador de Cáceres, y lo acordado.

Y habiéndose dignado S. M. la Reina

(Q. D. G.) resolver de conformidad en lo consultado por las referidas Secciones, de Real orden lo comunicó á V. S. para su inteligencia y efectos correspondientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 de enero de 1859.—Pascual Herrero. Sr. Gobernador de la provincia de Cáceres.

Lo que se inserta en el Boletín oficial para conocimiento del público. Orense 22 de febrero de 1859.—El Gobernador, Hermeugildo Gutiérrez.

Continúa la Gaceta núm. 50 sobre la clasificación de montes, inserta en el número anterior.

REAL ORDEN.

Para el debido cumplimiento del Real decreto de ayer, que manda proceder a una nueva clasificación general de los montes del Estado, de los pueblos y de los establecimientos públicos, que distinga los enajenables de los que no lo son, el Gobierno de S. M. cuenta confiadamente, y por eso no vacila en señalar brevísimo plazo para tan importantes y complejas operaciones, con el celo de las Autoridades superiores de las provincias, y con la inteligente actividad del Cuerpo de Ingenieros. Por la hora de la Administración las primeras, y los segundos por el honor de la ciencia, aprovecharán sin duda alguna esta ocasión de demostrar qué no han sido estériles los esfuerzos hechos por el país, tanto para establecer un sistema administrativo que responda a las variadas necesidades de la época, como para buscar en instituciones científicas las garantías convenientes de la conservación y fomento de la riqueza forestal.

No es posible determinar desde luego las reglas de conducta a que los Gobernadores deberán ceñirse con el objeto de coadyuvar por su parte al pensamiento del Gobierno de S. M. De varias clases, y diferentes tal vez en cada comarca, ó en cada caso, serán los auxilios que los Ingenieros de montes necesiten para la rápida y completa clasificación que van a realizar; pero para conseguir el acierto en este punto, basta a las Autoridades superiores de las provincias saber que llenaran un servicio importante prestando a los Ingenieros todos los medios de ilustración ó de acción que, estando en sus facultades conceder, les sean reclamados por aquellos; ó sugeridos por su propio celo.

Menos hacerlo todavía es convertir en fórmulas concretas los principios a que los individuos del Cuerpo facultativo se han de atener para ejecutar con acierto la clasificación de los montes de segunda clase. Solo el estudio profundo y minuzioso en cuanto la premura del tiempo lo consienta, puede guiarles al formar su juicio sobre la conveniencia ó inconveniencia de que un monte determinado ó una serie de montes se conserve en el dominio público ó pase a ser objeto de las ejecuciones privadas.

Respecto de la grave y funesta trascendencia de los desmontes indebidos, nadie tiene que advertirles (el Gobierno), ellos tienen obligación de conocer tan a fondo como el que más la exactitud de los lamentables perjuicios causados por no haber opuesto la Administración pública, ignorante en unos tiempos y poco protegida en otros de las máximas de la ciencia, el conveniente, correctivo, á arraigadas preocupaciones y á prácticas abusivas. Pero al mismo tiempo cuidarán con especial esmero de no incurrir en exageración extendiendo demasiado los límites de los desmontes prohibidos. Por evitar un mal podría hacerse en otro, y sólo sería ciertamente y de mucha magnitud, arrancar de la esfera de acción del interés particular lo que no esté retido en el dominio público por graves razones. No serían

los montes los menos perjudicados por el exceso de ello, que en exagerada escala los apartase de la venta, pues el poco acierto notado en su clasificación se convertiría en poderosa arma para que las preocupaciones y los intereses que los son adversos provocasen una reacción en sentido contrario; ni, aun prescindiendo de esta razón de conveniencia para la misma riqueza forestal, podría ver el Gobierno, sin profunda disgusto, que se suscitaran trabajos inútiles e indebidamente al desarrollo de los grandes bienes que el país espera de entregar á la secundante actividad del comercio y de la industria, las fincas del Estado, de los pueblos y de los establecimientos públicos.

Las mas extensas y mas importantes de las excepciones señaladas á la desamortización de los montes, y las que aquí deben consignarse en primer lugar por el respeto debido a las leyes, son las establecidas por las de 12 de mayo de 1855 y 14 de julio de 1856 respecto de las fincas de aprovechamiento común y de las dehesas boyales de los pueblos. Las razones en que se fundan no son de este lugar, ni atañen á la especificidad de los intereses sociales que este Ministerio y el Cuerpo de Ingenieros tiene en que cuidar en materia de montes. Tal vez una parte muy considerable de los que están en ese caso pudieran ser vendidos sin temor razonable de perturbación en las condiciones físicas del clima, y del terreno, ni en las generales de la industria y el comercio. De todos modos, para que el trabajo que hoy se emprende sea en lo posible completo, y dé una idea aproximadamente exacta, así de la totalidad de la riqueza forestal del país, como de la manera con que está distribuida y formada, los montes de aprovechamiento común y los que constituyan parte de las dehesas boyales de los pueblos serán incluidos en la clasificación general.

El conocimiento de estos datos será preciso al fijar de una manera definitiva las condiciones anteriores del dominio y de la administración de esos dos tipos de propiedades.

Conviendrá además que los Ingenieros como los Gobernadores procuren que los montes exceptuados por esos dos tipos sean, en lo posible, de los que no pueden ser vendidos por las clases de sus árboles ó por sus circunstancias cosmogónicas. Penetrando después en el examen de los montes para clasificarlos con arreglo a los principios y consideraciones que son ya de la exclusiva competencia de este Ministerio, los Ingenieros colocarán naturalmente en la primera categoría de los no enajenables los que se hallan exceptuados expresamente por los Reales decretos de 26 de octubre de 1855, de 27 de febrero de 1856 y de 16 del corriente. Es ya un axioma de la ciencia económica, lo mismo que de la ciencia forestal, que el monte alto no puede ser convenientemente poseído y cuidado por el interés individual. Los productos que nacen para su formación periodos seculares, solo pueden ser vendidos á instituciones permanentes. Aun cuando la experiencia no lo demuestre de un modo tristemente innegable, la razón bastaría para comprender que la acción privada ha de sacrificar siempre á ganancias presentes y seguras las probabilidades de los productos que no han de realizarse sino después de plazos larguísimos. Y si esto ha sido así en todas épocas, sucede con mucha más razón en la presente, en que más activo y emprendedor el interés individual, y más acostumbrado á vencer dificultades y a preocuparse resultados pronto de sus empresas, no se resignaría á dejar para tiempos venideros las resultados de su trabajo ó de su esfuerzo presentes, aun cuando la ganancia hubiere de ser mayor; y menos podría conformarse con ese paciente proceder en un ramo como el de montes, en el que por excepción de las reglas generales de la economía política, la mayor producción en especie corresponde menor renta;

Las maderas necesarias para la construcción civil y la naval no abaste, yan jamás el mercado en cantidad suficiente si hubiere de ser objeto de especulación privada la siembra, ó plantación, el cuidado y fomento de los árboles que las han de producir. Las clases que constituyen el monte alto son, por otra parte, necesarias la legislación general para impedir funestos trastornos en las condiciones cosmogónicas, y los terrenos en que crecen rara vez sirven para el cultivo agrario. Así se ve constantemente que cuando un monte de esas clases pasa al dominio particular queda destruido más ó menos pronto para que se produzca cuanto antes los mayores beneficios á su dueño, y es en seguida abandonado, no si viendo para ningún aprovechamiento ulterior y dejado sentir su falta para conservar las condiciones favorables del clima.

Sin embargo, también en este punto hay que hacer algunas excepciones y evitar la exageración en que se incurriera declarando no enajenables todas las fincas en que radican árboles de las clases exceptuadas por los referidos Reales decretos. Cuando el arbolado componga una pequeña parte del terreno, no deberá decidir de la suerte de todo él. No es fácil fijar desle luego una regla absoluta que señale la proporción que ha de haber entre el número de árboles y la extensión de la finca para que ésta haya de ser considerada como monte; pero convendrá que en todos los casos que ocurrán, con igualdad los Ingenieros ambos datos para que la resolución definitiva se forme con suficiente conocimiento de causa, y pueda darse unidad á las declaraciones de esta especie en todos los distritos y provincias.

(Se continuará.)

ADMINISTRACION PRINCIPAL DE HACIENDA PÚBLICA DE LA PROVINCIA.

La Dirección general de Contribuciones con fecha 17 del actual dice á esta dependencia lo siguiente:

El Exmo. Sr. Ministro de Hacienda dice á esta Dirección general con fecha 10 del actual lo que sigue:

Exmo. Sr.: He dado cuenta á la Reina (q. D. g.) de la exposición de V. E., haciendo presente las ventajas que deben resultar al servicio público y á los pueblos, de que los Peritos repartidores desempeñen su cargo por más tiempo del que se prejala en el art. 15 del Real Decreto de 25 de mayo de 1845, sin de que no se renueven anualmente en totalidad las juntas periciales encargadas de hacer los anillamientos de la riqueza territorial.

En su vista y estando también conforme el Ministerio de la Gobernación en que se adopten las disposiciones propuestas por V. E., se ha dignado S. M. resolver:

1.º Que los Peritos repartidores desempeñen su cargo cuatro años, reemplazándose cada dos por mitad la junta pericial.

2.º Que el Alcalde Presidente del Ayuntamiento lo sea de la junta pericial, y que el Ayuntamiento elija uno de los concejales que habrá de ser el Vice-Presidente.

3.º Que el Secretario del Ayun-

tamiento desempeñe también la secretaría de la junta.

4.º Que los gastos necesarios para la evaluación de la riqueza y formación de los anillamientos y repartos de la contribución territorial se paguen por el presupuesto municipal.

5.º Que los vocales de las comisiones de evaluación y repartimiento establecidas en las capitales de provincia y en otros pueblos por disposiciones especiales se reemplazan también por mitad cada dos años como los peritos repartidores que componen las juntas periciales.

Y 6.º Que se observe todo lo demás que se halla prevenido respecto de la elección, organización y atribuciones de las expresadas juntas.

De Real orden lo digo á V. E. para su inteligencia y efectos correspondientes.—Y la Dirección lo comunica á V. S. para su conocimiento y cumplimiento.

Lo que tengo el gusto de poner en noticia de los Ayuntamientos, para que en su vista procedan á hacer la propuesta de peritos repartidores en los términos que se expresan; y por lo mismo que no han de innovarse anualmente como hasta ahora, se procure que la elección sea la más acertada, recayendo en personas de probidad y conocimiento en los terrenos y sus producciones; en la inteligencia que en fin de marzo próximo deben estar instaladas en todos los distritos municipales de la provincia.

Orense 22 de febrero de 1859.—Joaquín M. Espiú.

Cuando en 15 del corriente se publicó el repartimiento de la contribución de consumos y recargo provincial sobre la misma, se previó terminantemente que antes de concluir dicho mes obisásen en esta dependencia los repartos individuales de todos y cada uno de los Ayuntamientos de la provincia. Hasta la fecha solo 57 han correspondido á la invitación justa de esta Administración, deseosa siempre de evitar gastos y perjuicios de cualquiera género; pero a pesar de su buen deseo y de la complacencia que usa y tendrá con todos, no puede menos de exigirles el cumplimiento de un servicio que ya debiera estar concluido. Por lo tanto vuelve á dirigirse á los morosos, concediéndoles el improrrogable término de quince días para presentar corrientes y ultimados los repartimientos de consumos y los que aun faltan de territorial; en la inteligencia de que si desoyen este amistoso aviso, y no cumplen con sus respectivos deberes, me veré en la imprescindible y dura necesidad de echar mano de las medidas coercitivas de que puede disponer con arreglo á instrucciones. Orense 24 de febrero de 1859.—Joaquín María Espiú.

COMISION PRINCIPAL
DE VENTAS DE BIENES NACIONALES
de la provincia de Orense.

por disposicion del Sr. Gobernador civil de esta provincia, y en virtud de las leyes de 1º de mayo de 1855, 11 de julio de 1856, Real decreto de 2 de octubre de 1858 e instrucciones para su cumplimiento. Se sacan á pública subasta en el dia y hora que se dirá los fincas siguientes:

Renata para el dia 28 de marzo próximo de once á una del dia en las casas consistoriales de esta capital ante el Señor Juez de primera instancia Don Facundo Santos Lid y escribano D. Santos de la Torre.

BIENES DE CORPORACIONES CIVILES.

Rústicas.—Instrucción pública inferior.
—Menor cuantía.

AYUNTAMIENTO Y ESCUELAS DE VIANA.

Número
del
inventario.

152 Un prado de 2.ª y 3.ª clase en Ocestro, su mensura 6 legas ó sean 36 áreas, linda oriente Pedro Antonio García, norte Manuel Estevez, poniente Cayetano Fernández y mediodia Pedro Estevez. Fué tasado en venta en 560 rs. y en renta en 42 rs., por la que ha sido capitalizado en 915 rs. que servirán de tipo para la subasta.

153 Un centenar de 3.ª clase en Val do Espiñeiro, su mensura 6 legas ó sean 36 áreas, linda oriente Pedro Antonio García, norte Manuel Estevez, poniente Cayetano Fernández y mediodia Pedro Estevez. Fué tasado en venta en 560 rs. y en renta en 42 rs., por la que ha sido capitalizado en 915 rs. que servirán de tipo para la subasta.

150 Un prado de 3.ª clase en Acabada, su mensura 1 lega ó sean 6 áreas, linda oriente Manuel Estevez, norte Don José Robledo, poniente D. José Armesto, y mediodia Ramón García. Fué tasado en venta en 210 rs. y en renta en 18 rs., por la que ha sido capitalizado en 405 rs. que servirán de tipo para la subasta.

151 Otro prado de 3.ª clase en Masarela, su mensura 2 legas ó sean 12 áreas, linda oriente monte comun, mediodia Cayetano Estevez, norte D. Francisco Gómez y poniente Domingo Vasalo de Villarino. Fué tasado en venta en 200 rs. y en renta en 15 rs., por la que ha sido capitalizado en 337 rs. y 50 céntimos que servirán de tipo para la subasta.

154 Una cortina de segunda clase en Barrio, su mensura 3 maquilas ó sean 3 áreas, linda oriente D. José Armesto, norte Manuel Rodríguez, poniente José Luis y mediodia Cayetano Estevez. Fué tasada en venta en 240 rs. y en renta en 18, por la que ha sido capitalizada en 405 reales que servirán de tipo para la subasta.

147 Una tierra de tercera clase en Chao, su mensura 2 legas ó sean 12 áreas, linda oriente Cayetano Estevez, norte Francisco Fernández, poniente Agustín Salazar y mediodia José Manso. Fué tasada en venta en 80 rs. y en renta en 6 rs., por la que ha sido capitalizada en 135 rs. que servirán de tipo para la subasta.

148 Otra tierra de tercera clase en Tapada, su mensura 2 legas ó sean 12 áreas, linda oriente herederos de D. Manuel Fernández, norte Pedro García, poniente porto comun y mediodia D. Manuel Fernández. Fué tasada en venta en 40 rs. y en renta en 3 rs., por la que ha sido capitalizada en 67 rs. y 50 céntimos que servirán de tipo para la subasta.

149 Una cortina de segunda clase en Portela, su mensura 1 y $\frac{1}{2}$ legas ó sean 9 áreas, linda oriente camino que va á Raigada, mediodia camino de la Labandeira, norte y mediodia D. Pedro Sánchez. Fué tasada en venta en 310 rs. y en renta en 21 rs., por la que ha sido capitalizada en 510 rs. que servirán de tipo para la subasta.

365 Un prado de segunda clase en Suiñas, su mensura 2 legas ó sean 12 áreas, linda oriente D. José Armesto, poniente herederos de D. Manuel Fernández norte el anterior y mediodia Benito Díaz. Fué tasado en venta en 210 rs. y en renta en 18 rs., por la que ha sido capitalizado en 405 rs. que servirán de tipo para la subasta.

156 Otro prado de segunda clase en Cabalelos, su mensura 2 legas ó sean 12 áreas, linda oriente D. José Robledo, mediodia P. dro Nuñez, norte Pedro Alfonso y poniente camino. Fué tasado en venta en 400 rs. y en renta en 30 rs., por la que ha sido capitalizado en 675 rs. que servirán de tipo para la subasta.

157 Otro prado de tercera clase en Mormeira, su mensura 1 lega ó sean 6 áreas, linda oriente D. José Armesto, norte José González, poniente María García y mediodia Silvestre Nuñez. Fué tasado en venta en 160 rs. y en renta en 12 reales, por la que ha sido capitalizado en 270 rs. que servirán de tipo para la subasta.

158 Una tierra sobre ó campo de segunda clase, su mensura 1 lega ó sean 6 áreas, linda oriente Pedro Alonso, mediodia Manuel Fernández, norte Pedro Garrido y poniente herederos de Manuel García. Fué tasada en venta en 40 rs. y en renta en 3 rs., por la que ha sido capitalizada en 67 rs. 50 céntimos que servirán de tipo para la subasta.

159 Otra tierra en ó Raposo de tercera clase, su mensura una lega ó sean 6 áreas, linda oriente Manuel Fernández, mediodia María Fernández, poniente Manuel Arias y norte D. José Armesto. Fué tasada en venta en 40 rs. y en renta en 3 rs., por la que ha sido capitalizada en 67 reales 50 céntimos que servirán de tipo para la subasta.

ADVERTENCIAS.

1.º No se admitirá postura que no cubra el tipo de la subasta.

2.º El precio en que fueren rematadas las fincas, que se adjudicarán al mejor postor, sean de mayor ó de menor cuantía y procedan de corporaciones civiles, lo pagará este en diez plazos iguales de á 10 por 100 cada uno. El primero á los quince días siguientes al de notificarse la adjudicación, y los restantes con el intervalo de un año cada uno para que en nueve quede cubierto todo su valor, según se previene en la ley de 11 de julio de 1856.

3.º Las fincas de mayor cuantía del Estado continuarán pagándose en los quince plazos y 14 años que previene el art. 6.º de la ley de 1.º de mayo de 1855, y con la bonificación del 5 por 100 que el mismo otorga á los compradores que anticipen uno ó mas plazos, pudiendo estos hacer el pago del 50 por 100 en papel de la Deuda pública, consolidada ó diferida, conforme lo dispuesto en el artículo 20 de la mencionada ley. Las de menor cuantía se pagarán en un solo plazo igual, ó lo que es lo mismo durante 19 años. A los compradores que anticipen uno y mas plazos no se les hará mas abono que el 3 por 100 anual; en el concepto que el pago ha de ejecutarse al tenor de lo que se dispone en las instrucciones de 31 de mayo y 30 de junio de 1855.

4.º Segun resulta de los antecedentes y demás datos que existen en la Administración de Propiedades y Derechos del Estado de esta provincia, las de que se trata no se hallan gravadas con carga

alguna, pero si apareciesen posteriormente se indemnizará al comprador en los términos que en la ya citada ley se determina.

5.º Los derechos del expediente hasta la toma de posesión serán de cuenta del rematante.

6.º A la vez que en esta capital habrá otra subasta en el mismo dia y hora en Viana, en cuyo partido están sitas dichas fincas.

Lo que se anuncia al público para conocimiento de los que quieran interesarse en la adquisición de las fincas insertas en el precedente anuncio.

NOTAS.

1.º Se consideran como bienes de Corporaciones civiles, los Propios, Beneficencia, Instrucción pública, cuyos productos no ingresan en las Cajas del Estado, y los demás bienes que bajo diferentes denominaciones correspondan á las provincias y á los pueblos.

2.º Son bienes del Estado los que llevan este nombre, los del Clero, los de Instrucción pública superior, cuyos productos ingresan en las Cajas del Estado, los del secuestro del ex-Infante D. Carlos, los de las órdenes militares de San Juan de Jerusalén, los de Cofradías, Obras-pías, Santuarios y todos los pertenecientes y que se hallen disfrutando los individuos ó corporaciones eclesiásticas, cualesquiera que sea su nombre, origen ó cláusulas de su fundación, á excepción de las capellanías colativas de sangre.

Orense 26 de febrero de 1859.—E. G. I., Angel M. Lozano.

Ayuntamiento de Rairiz de Veiga.

Dispuesto por Real orden se proceda á la fijación de nombres á las calles que no los tengan y numeración de casas en donde no lo estén, se anuncia al público con objeto de que los que quieran interesarse en la contrata de fijación y numeración de las de este municipio, concurran á la capitular del mismo el dia 27 del corriente á la una en punto de su tarde, en cuyo dia y hora se hará remate diligítivo á favor del que ofreciese mas ventaja al público con arreglo al pliego de condiciones que estará de manifiesto. Rairiz de Veiga febrero 18 de 1859.—E. A. P., Francisco Baños.—D. S. O., Joaquín de Puga, secretario.

Idem de Taboadela.

Esta corporación y asociados acordaron anunciar la subasta de la titulación de las calles y la numeración de las casas, así como la medición de distancia entre la casa consistorial y los lugares, caseríos que comprende este distrito municipal, cuyo remate con arreglo al pliego de condiciones que se hallará de manifiesto en la secretaría de ayuntamiento tendrá lugar el domingo 27 del actual á las dos de su tarde. Taboadela febrero 29 de 1859.—E. A. P., Canuto Gallego.

Juzgado de 1.ª instancia de Arzúa.

Don Ramón Rodríguez Valeiras, juez de primera instancia de Arzúa y su partido judicial, etc.—En este juzgado y por la escribanía del que resienda, se instruyen diligencias criminales en averiguaciou de quienes hubiesen sido los autores que en la noche del 22 de enero último, hurtaron á Rosendo López y Manuela de Ben, de Santa María de Conzar, á cada uno su vaca de las respectivas cuadras en que las tenían, de val'or la del primero en 220 rs. y la de la segunda 280.

Por tanto y una vez nada pudo descubrirse, acordé hacerlo presente al público por medio de este anuncio, esperando y rogando á las autoridades enti-

quienes sucre visto, se sirvan practicar to las aquellas jestiones que les sugiera su buen celo á descubrir el paradero de aquellos animal's y su remesa á este juzgado con las personas en cuyo poder se encuentren, á cuya fin se insertarán aquí las señas de dichas reses. Dado en la villa de Arzúa á 16 de febrero de 1859.—Ramon Rodríguez Valeiras.—Por su mandado, Silvestre Paredes.

Señas de las vacas.

La del Rosendo.—Color vermello, de 8 años de edad, preñada, astas pequeñas, cola larga, sin otra señal; la otra color idem, asta regular, preñada de 5 meses, y en el vientre lado izquierdo junto á la pierna de detrás una estrella ó punta blanca, sin que conste la edad.

Juzgado 3.º de paz de Leiro.

Don Javier Loureiro, secretario del tercer juzgado de paz de Leiro.—Hago notorio que en juicio verbal de don Ramón María Piñeiro con Pedro Martínez, recayó por rebeldía del último la sentencia siguiente:

En la audiencia del tercero juzgado de paz de Leiro á 50 días del mes de noviembre de 1853, don Miguel López, tercer juez de paz que lo sirve por antemano su secretario, dijo:

Que habiendo oido en juicio verbal á don Ramón María Piñeiro, vecino de Santiago de Bidau, alcaldía de la Golada, que como marido de doña Socorro Araujo, reclamó de Pedro Martínez, de Gomariz, 200 rs. por razón de renta atrasada hasta este año de 1853 inclusive, á razón cada año de cuatro ollas;

Resultando que el demandante probó cumplidamente su reclamación por medio de dos testigos conformes:

Considerando que la deuda está justificada y que por no haberse presentado el demandado, aunque fuera citado en persona continuó el juicio en su rebeldía.

Por estas razones debo de providenciar en rebeldía de Pedro Martínez que satisfaga los 200 rs. con las costas al don Ramón María Piñeiro y que no presentándose á ser notificado se publique por rebeldía de dicho Pedro conforme está presentido en la ley civil y se notifique en persona al demandante.

Así lo determinó y firma de que yo el secretario certifico.—Miguel López.—Javier Loureiro, secretario.

Dado en Leiro á 5 de diciembre de 1858.—Pedro Martínez.—Javier Loureiro, secretario.

DESCUENTOS Y PRESTAMOS

CON CONDICIONES FÁCILES Y Á UN MÓDICO INTERÉS.

Se descuentan letras y pagares á toda fecha.

Se presta dinero:

Sobre títulos de la deuda pública de todas clases.

Sobre acciones del Banco de esta plaza.

Sobre buques y sus cargamentos.

Sobre géneros, frutos y efectos de todas clases.

Sobre fincas rústicas y urbanas.

Coruña Canton grande, número 19.